Globethics Repository



Rendición de cuentas y transparencia en el financiamiento político

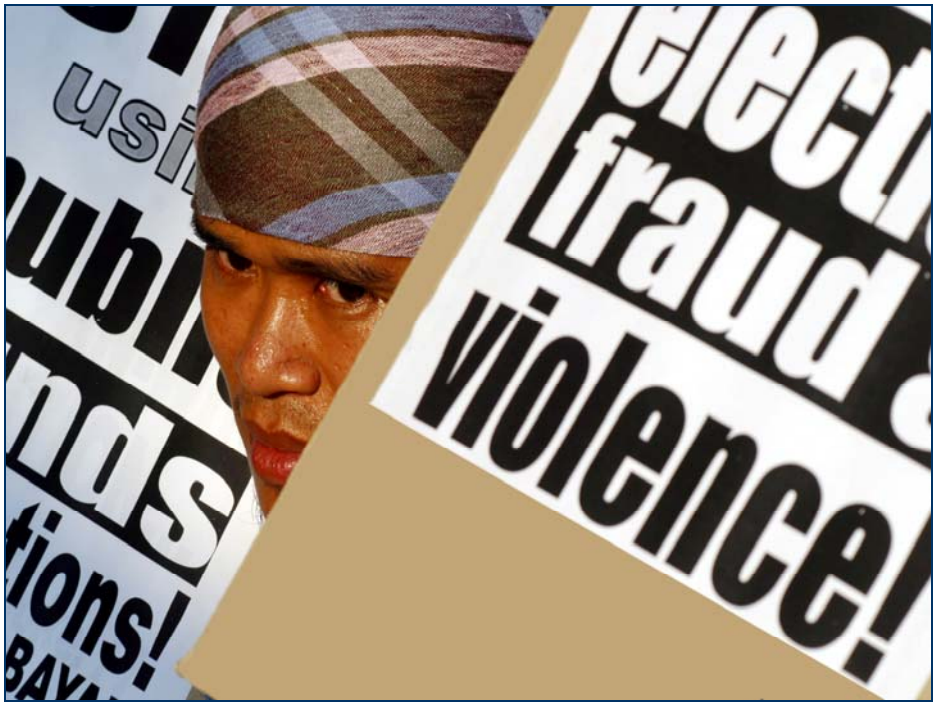
This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see https://www.globethics.net. Data and content policy of Globethics Repository see https://repository.globethics.net/pages/policy.

Item Type	Journal
Authors	Transparency International
Publisher	Transparency International
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-11-03 17:20:20
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/177545

01 / 2008

Documento de trabajo

TRANSPARENCY INTERNATIONAL
the global coalition against corruption



Rendición de cuentas y transparencia en el financiamiento político:

¿Por qué, cómo y para qué?

Las democracias modernas necesitan contar con organizaciones fuertes de partidos políticos que compitan por el poder político en procesos electorales justos. Para que el sistema funcione, los partidos deben disponer de recursos para llevar a cabo buenas campañas y apoyar a las maquinarias políticas. Pero los partidos y sus candidatos deben también conciliar la búsqueda de recursos con el riesgo que ésta puede suponer de distorsionar la competencia política y corromper a los empleados públicos elegidos. Dependiendo de su procedencia, de cómo se distribuyen y de cómo se gastan, los recursos de los partidos y los candidatos pueden distorsionar las elecciones y las democracias.

Índice

1. Riesgos de corrupción
2. Regulaciones y respuestas en el pasado
3. Papel de la sociedad civil
4. Lecciones aprendidas
5. Partes implicadas en la lucha

Lista para controlar la rendición de cuentas y la transparencia:

La información proporcionada a los miembros de los partidos, a los organismos estatales y al público debe ser:

- Completa. Todos los recursos relevantes deben estar incluidos en las políticas de divulgación. Los recursos incluyen al dinero y a lo que puede adquirirse con éste. En el caso de los partidos políticos, el dinero hace referencia a sus activos, inversiones, deudas y otras transacciones financieras. También pueden incluirse contribuciones no monetarias como parte de los recursos de los partidos. Algunos recursos son difíciles de clasificar, tales como los beneficios especiales ofrecidos por el Estado (por ejemplo, las deducciones fiscales, el tiempo gratuito de emisión en los medios de radio/teledifusión) o por agentes privados (por ejemplo, los descuentos por servicios prestados, los préstamos).
- Detallada. El público tiene que poder identificar claramente todas las contribuciones hechas por donantes y partidos, incluidos los nombres de los que hayan contribuido.
- Fiable. El control estatal y social se basa en gran medida en que los partidos y otros actores relevantes proporcionen información correcta. Dada la importancia de ésta, presentar datos falsos se considera un crimen en buen número de países.
- Periódica y puntual. La información debería presentarse tan pronto como fuera posible desde el momento en que se haya llevado a cabo la transacción, ya que el paso del tiempo da pie a la manipulación. Toda información proporcionada en el periodo previo a las elecciones debe hacerse pública inmediatamente para los ciudadanos.
- Inteligible. La información tiene que ser presentada de forma fácil de comprender y utilizar. Información relativa al contexto que provenga de diferentes fuentes, así como bases de datos que puedan consultarse, son necesarias para permitir a los ciudadanos y a los medios de comunicación entender, interpretar y utilizar los datos sobre la financiación política.
- Accesible. Los datos no tendrían que estar disponibles únicamente cuando se solicitan, sino ser divulgados activamente por distintas vías. Las tecnologías modernas de la información permiten a los organismos estatales sistematizar la presentación de informes y el monitoreo online por medio de conjuntos de datos que puedan consultarse.

1. Riesgos de corrupción

El financiamiento político puede socavar los valores democráticos y de buena gobernabilidad que justamente apoya. Los dos riesgos principales son que los recursos (monetarios y no monetarios) distorsionen *los procesos electorales* e influyan de forma indebida las decisiones tomadas por los *representantes elegidos* de un país.[1]

Procesos electorales. El dinero puede distorsionar la competencia electoral cuando se distribuye injustamente entre los candidatos. Cuando la rendición de cuentas es escasa, se está dejando una puerta abierta para que los recursos puedan ser objeto de abusos por parte de partidos y candidatos. Los políticos en ejercicio pueden abusar de los recursos públicos para financiar sus campañas de reelección. Los recursos para los comicios electorales se pueden desviar a los bolsillos de los candidatos o utilizado para comprar votos. Cuando no existen controles adecuados, el financiamiento de las campañas puede incluso convertirse en la mejor manera de blanquear dinero, como ha sido documentado en países como Bosnia y Herzegovina, El Salvador y Haití.[2]

Representantes elegidos. La financiación política puede influir negativamente el diseño de las políticas tras las elecciones, especialmente cuando se financia a candidatos en vez de a partidos. En Estados Unidos, tales alegatos han obligado recientemente a miembros clave del Congreso a dimitir.[3] Desafortunadamente, son las comunidades pobres las que salen perdiendo en esta pugna por el dinero. Una compañía petrolera en Nigeria puede utilizar las contribuciones a las campañas para influir en los votos, mientras que ciudadanos pobres preocupados por problemas medioambientales no pueden lo pueden hacer.[4] Las políticas nacionales no son el único ámbito potencialmente afectado: en países donde se permiten las contribuciones provenientes del extranjero o éstas se han producido de facto, el financiamiento político puede también distorsionar las decisiones de política exterior de un gobierno.

Las democracias modernas se esfuerzan por contener estos dos riesgos con leyes y regulaciones, centradas en limitar el gasto de las campañas y de las contribuciones, en prohibir determinadas fuentes de ingresos así como en regular el uso de los fondos públicos para los partidos y campañas. Sin embargo, estas medidas no siempre son suficientes para mitigar los efectos negativos que puede producir el financiamiento político. Con frecuencia las leyes son demasiado permisivas, o no se ejecutan plenamente. Los controles del Estado se pueden complementar con vigilancia pública por parte de ciudadanos, sociedad civil y medios de comunicación. Ahora bien, para que ambas funcionen, tiene que haber transparencia.

Transparencia significa que el público dispone de información completa, detallada y fiable sobre el financiamiento de las campañas políticas, proporcionada en el momento adecuado, de forma inteligible y accesible (véase el recuadro en el lateral).

Cuando no hay transparencia en la financiación política, no hay mecanismos para detectar si las políticas están presionando a las agendas privadas para que "devuelvan el favor" a los que han apoyado financieramente la campaña.

Hay tres niveles interconectados a través de los cuales se puede promover la transparencia para reducir los riesgos de corrupción relativos al financiamiento político:

- Rendición de cuentas de los partidos: la obligación para los partidos de llevar una contabilidad interna y sistemas contables adecuados, y de mantener informados a los miembros del partido.
- Rendición de cuentas al Estado: la obligación para partidos y candidatos, donantes y proveedores de servicios, de presentar informes a los organismos del Estado sobre las operaciones relativas al financiamiento político.
- Rendición de cuentas al público: la obligación de divulgar públicamente toda información relativa a la financiación de las campañas.

Estas dimensiones internas y externas de la rendición de cuentas son esenciales para asegurar que los procesos electorales y los funcionarios elegidos no resultan afectados por una financiación de las campañas incontrolada e irresponsable.

2. Regulaciones y respuestas en el pasado

Como respuesta a varios escándalos previos relacionados con el financiamiento político, las democracias modernas han aprobado leyes que utilizan los incentivos y las sanciones estatales para:

Prevenir el abuso de los recursos públicos. Todos los países han prohibido prácticamente a las instituciones gubernamentales el aportar recursos a los partidos políticos y a los candidatos (aparte de las subvenciones públicas autorizadas). Sin embargo, el abuso de los recursos del gobierno durante las campañas electorales sigue constituyendo un problema en muchos países. Desde Mozambique a Venezuela, varios gobiernos han sido acusados de cruzar la línea entre estatales Estado y los partidos y de utilizar los recursos de la nación para financiar e influir en el resultado de las elecciones. Como respuesta a estas acusaciones, los países han introducido reglas para controlar los gastos del gobierno durante las campañas electorales.[5] Se han establecido reglas específicas relativas a las contrataciones públicas o de los funcionarios y empleados públicos, a la publicidad del gobierno en los años electorales y a la responsabilidad del fiscal general. Además, muchos países han limitado la reelección consecutiva de los gobiernos, aunque países como Argentina, Brasil y Colombia que contaban con leyes muy estrictas las han flexibilizado recientemente.

Controlar las donaciones privadas. Las grandes donaciones privadas constituyen a menudo un riesgo para la democracia. Aunque pueden afianzar a la oposición en países dominados por los partidos oficialistas, es necesario que haya reglas para garantizar una situación equilibrada. Éstas incluyen prohibir la financiación

Al transmitir publicidad electoral, los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) ayudan a promover la competencia política y la comprensión por parte de los votantes de lo que está en juego.

por parte de corporaciones u otras fuentes no deseadas, así como límites en las grandes contribuciones de donantes privados. Igualmente, algunos países han fijado límites a los costes de las campañas para controlar el papel del dinero y equilibrar el terreno para que otros candidatos puedan participar. No obstante, la financiación privada de candidatos y partidos continúa siendo incontrolada en grandes democracias como India, Brasil, y Alemania. En otros países como Argentina, Japón y Rusia, se ignoran ampliamente los límites estrictos debido a lagunas jurídicas o a un control poco exigente.

Proporcionar financiación pública a los partidos y campañas electorales. Muchos países han introducido las subvenciones públicas como un medio para reducir la influencia externa y reforzar a los partidos políticos. La mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea ofrecen un apoyo considerable a sus partidos mientras que países como Israel o México utilizan los recursos públicos para cubrir más del 80 por ciento de los gastos de las elecciones. Para las nuevas democracias, niveles similares de subvenciones pueden ayudar a equilibrar la competencia política y fomentar la integridad de los empleados públicos.[6] Sin embargo, cuando hay poca confianza en los políticos y el presupuesto para las necesidades básicas es pequeño, la financiación pública de los partidos puede provocar fuertes críticas y sencillamente sufragar a la élite política en el poder, tanto en democracias jóvenes como consolidadas. Además, las subvenciones no son una solución universal para remediar los riesgos de corrupción, como se ha comprobado en escándalos ocurridos en Alemania y en España.[7]

La sociedad civil y los ciudadanos deben adoptar un papel activo a la hora de abordar el complejo asunto del financiamiento político.

OSC -incluidos los capítulos de Transparency International (TI) en Argentina, Colombia, India e Indonesia, así como otros países- cuentan con amplia experiencia en informar periódicamente a los votantes sobre los perfiles de los candidatos, los partidos, las donaciones y los gastos incurridos en el periodo de las elecciones.[10]

Regular el papel de los medios de comunicación en las campañas. Los medios de comunicación pueden funcionar como un canal clave para mantener informado al electorado. Al transmitir publicidad electoral, los medios locales (prensa, radio y televisión) ayudan a promover la competencia política y la comprensión por parte de los votantes de lo que está en juego. Mientras que en algunos países, como Estados Unidos, se regulan los conflictos relativos a los medios de comunicación siguiendo el principio constitucional de la libertad de expresión, en muchos otros estas regulaciones han constituido el centro de las reformas del financiamiento político. Los cambios legislativos han incluido limitar el precio de la publicidad electoral, proporcionando un tiempo de emisión igual y gratuito a todos los candidatos y regulando el tipo de publicidad política permitida.[8] Teniendo en cuenta el alto coste de los gastos de los medios de comunicación, regular su papel en las elecciones puede ayudar a reducir la presión que sienten los partidos por conseguir más financiación. Países como Brasil, Chile y Sri Lanka han intentado equilibrar la cobertura en los medios de comunicación por medio de una regulación precisa sobre la publicidad en las campañas, proporcionando tiempo de emisión gratuito a los partidos y/o prohibiendo la publicidad remunerada.

Establecer agencias estatales independientes para el seguimiento. Agencias autónomas con mandato para vigilar las reglas relativas a la financiación política e imponer sanciones adecuadas han sido establecidas en muchas democracias jóvenes y consolidadas. Incluso en sistemas políticos establecidos como

Australia y Francia, su función ha sido reconocida sólo en las últimas décadas.[9] El reto para dichas agencias es poner en marcha operaciones verdaderamente independientes, disponer de la preparación técnica adecuada, de una asignación de recursos suficiente y de amplia capacidad legal para investigar y sancionar actuaciones ilegales. En muchos países, estas agencias siguen siendo muy dependientes del presidente o del partido en el poder, lo que afecta incluso a la nominación del encargado de supervisar el organismo, como ocurre en Nicaragua y en la República Dominicana. No obstante, sólo una agencia estatal fuerte puede exigir el cumplimiento de las obligaciones de divulgación esenciales y promover la transparencia necesaria.

Los ciudadanos no deben sólo exigir información, sino utilizarla a la hora de votar cuando se descubren casos de mala conducta por parte de partidos y candidatos –como han hecho ya en países como Brasil, Venezuela, Australia y Polonia-.

Muchos países se ven atrapados en un limbo en relación con la financiación política cuando intentan empezar a establecer leyes e implementar los distintos tipos de políticas debatidos. Algunos países como Argentina han acelerado el ritmo de aprobación de regulaciones/leyes, aunque están fallando en persuadir a diferentes agentes para que exijan y adopten controles sociales de vigilancia más sofisticados. En otros casos, el peligro que acecha a ciertos países es la falta de voluntad política para proseguir las reformas, debido a la convicción de que el dinero permitirá en última instancia eludir cualquier tipo de regulación. En definitiva, la influencia incontrolada del dinero en la política y las reglas débiles socavan la transparencia y pueden causar cinismo político en los ciudadanos, como ha ocurrido en Brasil.

3. El papel de la sociedad civil

A pesar de las mejoras logradas en relación con la financiación de los partidos y las elecciones, los riesgos de corrupción en este ámbito continúan representando en la actualidad un riesgo para las democracias. Además de contar con regulación estatal y con agentes para garantizar el cumplimiento de la ley, la sociedad civil y los ciudadanos deben adoptar un papel activo a la hora de abordar el complejo asunto del financiamiento político. Dos áreas de actividad esenciales son:

Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está financiando a sus representantes políticos teniendo en cuenta que se trata del uso de los recursos públicos así como las implicaciones de las donaciones privadas en el diseño de las políticas.

- La supervisión de la financiación de las campañas por parte de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) han contribuido a capacitar/fortalecer a los ciudadanos para que éstos ejerzan su derecho al voto de manera informada. Muchas OSC con una larga trayectoria como observadores de comicios electorales han extendido el campo de acción del monitoreo electoral para abarcar diferentes dimensiones de la financiación política. Por ejemplo, existen OSC en Brasil que trabajan con el sector privado para mantener informadas a las empresas sobre las reglas relativas a las donaciones y al comportamiento responsable.[11] En otros países, OSC siguen la pista a los costes de publicidad como método para evaluar los gastos de las campañas y revelar los desequilibrios existentes entre los partidos en el acceso a los medios de comunicación.[12] Gracias a esta competencia técnica y experiencia profesional, algunas OSC han jugado un papel importante en el diseño de reformas vinculadas a la regulación en sus respectivos países.

- La capacitación de los ciudadanos para que exijan a los empleados públicos elegidos que rindan cuentas. Organizaciones que trabajan para promover una buena gobernabilidad están investigando la conexión entre las donaciones privadas, los empleados públicos elegidos que éstas apoyan y la medida en que las decisiones sobre las políticas se ven influeidas y confluyen con los intereses de los donantes. En Estados Unidos por ejemplo, algunas OSC han asociado datos sobre contribuciones políticas privadas con la aprobación de políticas y contratos que benefician a determinados donantes.[13]

Capacitar a los ciudadanos en estos asuntos puede resultar más ventajoso que las sanciones estatales, ya que la reacción pública suele consistir en retirar el apoyo cuando se sospecha que ha habido una conducta delictiva o malintencionada. Para que funcione la vigilancia social, los ciudadanos deben tener acceso a esta información y ser capaces de entenderla y utilizarla a la hora de votar. Sin embargo, es posible que tal conocimiento no tenga un impacto sobre el voto, como fue el caso en Bosnia y Herzegovina cuando candidatos supuestamente corruptos siguieron consiguiendo el voto popular.[14] Cuando los datos sobre las donaciones de las campañas son utilizados por los medios de comunicación y otras organizaciones, se puede lograr exponer quién está financiando a qué políticos, y si algunos de ellos son corruptos.[15]

La transparencia en la financiación política es esencial para que la sociedad civil pueda actuar. Los ciudadanos tienen derecho a saber quién está financiando a sus representantes políticos teniendo en cuenta que se trata del uso de los recursos públicos así como las implicaciones de las donaciones privadas en el diseño de las políticas. Los partidos deben ser considerados responsables y debe exigírseles que rindan cuentas por los recursos que reciben, tanto si se trata de fondos públicos como privados. Los candidatos deben también rendir cuentas por toda financiación recaudada de manera independiente. Al mismo tiempo, los gobiernos tienen que divulgar la información, especialmente cuando están subvencionando a partidos, para dar a los ciudadanos la oportunidad de que exijan cuentas a sus representantes políticos.

4. Lecciones aprendidas

La transparencia no incluye sólo el proporcionar y divulgar información. Tiene que haber una demanda de información y la información compartida debe ser utilizada para contribuir a transformar al conjunto del sistema político en uno más responsable y capaz de rendir cuentas. Las OSC, los medios de comunicación y los adversarios políticos deben asumir su responsabilidad como organismos de control y defensores del proceso. Incluso si se consigue transparencia en todos los ámbitos, existen otros obstáculos para los controles de la financiación política.

En primer lugar, mayor transparencia puede significar mayores costes, especialmente cuando el paisaje político está formado por muchos partidos pequeños. La obligación de presentar informes añade gastos. Sin embargo, las

Mejorar la transparencia y la rendición de cuentas es uno de los primeros pasos necesarios para recuperar la confianza de los ciudadanos en el sistema político.

tecnologías de la información de bajo costo y las subvenciones públicas pueden ayudar a superar este desafío.

En segundo lugar, la transparencia no siempre significa que se rindan cuentas por las acciones ejecutadas. Aunque los eslabones que conducen hasta la influencia de los donantes en las elecciones pueden investigarse fácilmente, es a menudo difícil demostrar que las donaciones han corrompido a los empleados públicos cuando éstos ya han sido elegidos. Pocos políticos han sido condenados por comercializar influencia dada la dificultad de establecer una relación causal en sus patrones de voto.

En tercer lugar, una mayor transparencia por sí sola puede constituir un obstáculo si está mal empleada. La transparencia puede desacreditar a la democracia o representar un conflicto con los valores democráticos en vez de promoverlos. Cuando la libertad política se encuentra gravemente entrabada, la transparencia puede no ser el mejor primer paso que haya que dar. En regímenes autoritarios, cualquier donante que contribuya a financiar a partidos y candidatos en la oposición puede sufrir presión del gobierno así como dejar a la oposición vulnerable a ataques. En países donde existe crimen organizado, la divulgación de quién ha donado qué y cuánto, también puede ser utilizada en contra de ciudadanos y empresas adinerados.

Por último, la transparencia y la rendición de cuentas no resuelven las cuestiones relativas a la igualdad que rodean a la financiación política. Todos los partidos y candidatos pueden estar presentando informes tal y como se les exige, pero el financiamiento puede seguir estando sesgado si no existen además regulaciones gubernamentales al respecto. La transparencia y la rendición de cuentas pueden ayudar a sacar a la luz casos de financiamiento desigual, pero no pueden conseguir que éste se distribuya de manera más equitativa.

5. Las partes implicadas en la lucha

Mientras que distintos actores pueden encabezar reformas sobre financiación política, los legisladores son quienes deben aprobar e implementar las iniciativas. Contrariamente a lo que sucede en otras áreas de interés público, regular la financiación política significa que empleados públicos elegidos están estableciendo leyes que van a afectar a su propia conducta. Este conflicto intrínseco de intereses hace que la voz de la sociedad civil sea muy necesaria.

Hay muchas buenas razones para que los parlamentarios y otros agentes apoyen la causa de la transparencia en el financiamiento político.[16] Resaltamos a continuación quiénes son cada uno de estos grupos, sus motivaciones y áreas de actuación:

- Partidos políticos. En todo el mundo los partidos han visto descender su reputación y credibilidad en numerosos índices y encuestas de opinión pública. La transparencia puede abordar estos problemas al proporcionar a los partidos la capacidad de evaluar a los candidatos que se incorporan

Contrariamente a lo que sucede en otras áreas de interés público, regular la financiación política significa que empleados públicos elegidos están estableciendo leyes que van a afectar a su propia conducta. Este conflicto intrínseco de intereses hace que la voz de la sociedad civil sea muy necesaria.

en sus listas así como los presupuestos de las campañas de sus adversarios políticos. La divulgación de información permite también proteger a los partidos y candidatos frente a la presión de tener que aceptar donaciones privadas y relacionadas con delitos.

- Agencias electorales. El trabajo de las agencias gubernamentales implicadas en supervisar el acatamiento a las leyes depende de la información. Aunque anteriormente se pedía a los partidos y candidatos que proporcionaran información sobre sus finanzas cuando ello les fuera solicitado, la obligación ahora debería consistir en presentar sistemáticamente dicha información a la agencia estatal. Divulgar la información permitirá a la sociedad civil, a los medios de comunicación y a los oponentes políticos identificar e informar sobre cualquier comportamiento ilegal, asistiendo de esta forma a las agencias estatales en su labor.

- Sector privado. Las empresas cuentan habitualmente con un incentivo para no divulgar información sobre las donaciones, y es el evitar que clientes e inversores sepan a quién están apoyando. Pero la divulgación puede ayudarles a protegerse en lugar de volverles más vulnerables. Puede servir como salvaguardia contra políticos que exijan donaciones excesivas o favores por medio de extorsión, y proporcionar a las empresas mejores medios para evaluar las prácticas de financiamiento de sus competidores y cualquier trato preferente que éstos puedan recibir. En definitiva, una mayor transparencia ayuda a que las empresas reduzcan el riesgo de que empeore su reputación y mejora su imagen como socio comprometido en construir democracias responsables, allí donde operan.

- Votantes. Los votantes son capaces de utilizar la mayor transparencia y divulgación de la información sobre la financiación política para respaldar a ciertos candidatos o para retirarles su apoyo. La información recogida y compartida debería ayudarles a identificar las respuestas a preguntas tales como: ¿Qué donantes tienen una influencia mayor en la política? ¿A quién han financiado? ¿Cuán cercana es la relación entre donantes y candidatos? ¿Dependen excesivamente algunos candidatos de unos pocos donantes? ¿Realizan los donantes contribuciones a todos los candidatos?

- Medios de comunicación. En la mayoría de los casos, los periodistas son aliados para promover la transparencia en la financiación política. Una política de divulgación mayor permitirá a los medios de comunicación mejorar su acceso a la información para poder llevar a cabo su labor informativa. Sin embargo, en muchos países, los periodistas no se han centrado todavía en el asunto de la financiación política y en su implicación para los procesos democráticos de una nación. Es importante que se les involucre más en el trabajo por medio de alianzas con otras partes implicadas (por ejemplo, las agencias electorales y las OSC).

Alentar a la colaboración y la cooperación entre los distintos actores puede generar los incentivos necesarios para modificar los comportamientos, actitudes

y prácticas de forma que promuevan mayor transparencia y rendición de cuentas. Estos cambios deben integrarse en el contexto de una vigilancia estatal más fuerte, de limitaciones en la financiación privada y en la existencia de apoyo público a los partidos políticos. Sin embargo, aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la financiación política no es la panacea para solucionar todos los problemas relacionados con el papel del dinero en la política. Esta labor tiene que ser parte de un conjunto de reformas más amplio que mejore el control público, si se quiere recuperar la confianza de los ciudadanos en la integridad del sistema político.

Este documento de trabajo ha sido preparado por el Departamento de Investigación y Políticas de la Secretaría de TI, junto con Silke Pfeiffer y Bruno Speck del Departamento de las Américas.

Para informarse sobre el trabajo de TI en relación con la corrupción en el financiamiento político, véase: www.transparency.org/global_priorities/corruption_politics/political_finance

Para más información sobre este documento de trabajo y otros de la serie, póngase en contacto con Craig Fagan, de la Secretaría de TI en: plres [at] transparency.org.

Referencias:

[1] *Muchas de las recomendaciones y experiencias mencionadas provienen del Proyecto Crinis, un estudio en ocho países sobre la financiación de los partidos y de las campañas electorales en América Latina, que Transparency International (TI) llevó a cabo en colaboración con el Centro Carter. www.transparency.org/regional_pages/americas/crinis. TI ha publicado también estándares sobre financiamiento político y ha desarrollado un instrumento para evaluar la transparencia del financiamiento político en países y campañas. Otras organizaciones, como el Centro Carter, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral y la Organización de los Estados Americanos, han iniciado o participado en proyectos similares.*

[2] *Para más información, véase: Jeff Fischer, Marcin Walecki and Jeffrey Carlson (eds.),* Political Finance in Post-Conflict Societies *(Washington, DC: IFES and USAID, May 2006). www.ifes.org/publication/0b087c527792ae130507f80957ad3f2b/Poltiical%20Finance%20in%20Post-Conflict%20Societies-small.pdf.*

[3] *Dos casos prominentes son el del antiguo líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de EEUU, Tom DeLay (Texas) y el del congresista demócrata por el estado de Louisiana, William Jefferson. Para más información sobre las reformas actuales en EEUU en el ámbito del financiamiento de las campañas electorales, véase el Acta McCain-Feingold-Cochran (2002). www.campaignfinancesite.org/legislation/mccain.html.*

[4] *TI y una amplia coalición de actores que luchan contra la corrupción han denunciado la cuestión de los pagos a gobiernos por parte de empresas petroleras, de gas y de minería, como parte de la campaña "Publica lo que pagas" (www.publishwhatyoupay.org), de la Iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas – EITI en sus siglas en inglés (eitransparency.org) y del Proyecto para promover la transparencia en los ingresos (www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/promoting_revenue_transparency).*

[5] *Los siguientes países han incorporado leyes relativas a la responsabilidad fiscal: Argentina, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Ecuador, Estonia, la India, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Suecia, Reino Unido, Venezuela, y otros países que han adoptado el Euro. Para más información, véase: George Kopits, Fiscal Responsibility Framework: International Experience and Implications for Hungary,* MNB Occasional Papers 2007/62 *(Budapest: Magyar Nemzeti Bank/The Central Bank of Hungary, 2007). ideas.repec.org/s/mnb/opaper.html.*

[6] *Esto resulta cierto cuando la financiación pública se combina con reglas para limitar la influencia del dinero privado, permitiendo a los recursos públicos sustituir (en vez de complementar) a otras fuentes de financiación. En muchos países, la suspensión de las subvenciones públicas por falta de acatamiento de las reglas de la financiación política ha resultado un medio efectivo para lograr su cumplimiento.*

[7] *Un financiamiento público significativo no evitó que los partidos políticos en Alemania resultaran involucrados en el asunto "Flick" en la década de 1970 o fueran acusados de utilizar cuentas no registradas en los años 90. A pesar de recibir apoyo estatal, el partido socialista español, PSOE, estuvo involucrado en un escándalo similar en los años 80 por haber aceptado donaciones ilegales de las empresas Fielsa y SEAT.*

[8] *Para una aproximación a la regulación de los medios de comunicación en las campañas políticas, véase: Steven Griner and César Arias, 'Medios de comunicación y partidos políticos en América Latina: una aproximación mas allá de la obsesión de controlar el gasto electoral',* en El triángulo de las Bermudas. El financiamiento de la política en México *(México City: Friedrich Ebert Stiftung, September 2007).*

[9] *Para más información y ejemplos, véase: U4 Help Desk,* Corruption in Political Party Financing and Electoral Campaigns *(Bergen, Norway: U4 Anti-Corruption Resource Centre, 16 April 2003). www.u4.no/helpdesk/helpdesk/queries/query8.cfm.*

[10] *Para más información sobre países de la región Asia y Pacífico, véase: www.transparency.org/regional_pages/asia_pacific/priority_areas/politics. Sobre América Latina, véase: www.transparency.org/regional_pages/americas/financiamiento_politico/guia.*

[11] *Véase: Instituto Ethos,* A responsabilidade social das empresas no processo eleitoral *(Sao Paulo, Brazil: Instituto Ethos, 2006).*

[12] *La Fundación Poder Ciudadano en Argentina ha sido uno de los líderes de este trabajo, utilizado en otros países en la región y en Europa Oriental. Para más información, véase: www.poderciudadano.org/index.php?do=temas&id=93.*

[13] *Para más información, véase: the Center for Responsive Politics: www.opensecrets.org/.*

[14] *Para más información sobre Bosnia y Herzegovina, véase: Jeff Fischer, Marcin Walecki and Jeffrey Carlson (eds.),* Political Finance in Post-Conflict Societies *(Washington, DC: IFES and USAID, May 2006).*

[15] *En Brasil, los datos de las donaciones a las campañas son accesibles gracias al Tribunal Superior de Justicia Electoral www.tse.gov.br, el organismo encargado de supervisar el financiamiento político. La prensa ha usado sus hallazgos para destapar casos de compañías que han financiado a políticos corruptos, y a políticos que han recibido dinero de empresas delictivas.*

[16] *La transparencia en la financiación política está también siendo promovida por actores internacionales. El Consejo de Europa y las convenciones contra la corrupción aprobadas por las Naciones Unidas y la Unión Africana mencionan la transparencia en el financiamiento político como una piedra angular para mejorar la integridad del sector público.*

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

Teléfono

+49-30-343820 -0

Fax

+49-30-347039 -12

Secretaría Internacional

Alt-Moabit 96

10559 Berlín

Alemania

© 2008 Transparency International. Todos los derechos reservados.

Transparency International (TI) es la organización de la sociedad civil que lidera la lucha contra la corrupción en el mundo. A través de más de 90 capítulos nacionales y de su secretaría internacional en Berlín, Alemania, TI crea conciencia sobre los efectos nocivos de la corrupción, trabajando con gobiernos, empresas y sociedad civil para desarrollar e implementar medidas eficaces para combatirla. Para más información, consulte la Web: www.transparency.org